

lo Segundo Civil del Circuito - Soacha Cundinamarca

Cungano soguino si in usi cui cui cui cui cui cui cui cui cui cu						
Tipo de Proces	so	Acción de Tutela				
Radicación del Proceso de Juzgado de Origen 257544189004 202200817						
Radicación del Proceso 257543103002 202220074						
Accionante	Oscar Fernando Gutiérrez Vásquez					
Accionados	 Inspección Quinta (5ª) Municipal de Policía de Soacha – Cundinamarca Secretaría de Gobierno de Soacha – Cundinamarca 					
Derecho	Debido Proceso	Decisión	Confirma			
Soacha, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)						

Asunto a Tratar

Procede el Despacho a resolver la impugnación del fallo de Tutela proferido el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Cuarto (04) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha - Cundinamarca, el cual negó los derechos incoados en la acción de tutela. 008Fallo

Solicitud de Amparo

El señor Oscar Fernando Gutiérrez Vásquez interpusieron acción de tutela, de conformidad con los hechos obrantes en el escrito tutelar. 002EscritoAnexos

Trámite

El Juzgado Cuarto (04) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha - Cundinamarca, admitió la acción de tutela por medio de proveído el día cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidos (2022), en el cual, ordenó notificar a las partes, para que ejercieran su derecho de defensa.

El fallador de primera instancia estudió el derecho amenazado, y de acuerdo al principio de informalidad el cual le corresponde al juez identificar y proteger, negó el amparo de los derechos incoados por el accionante.

Por lo que en su oportunidad el accionante Oscar Fernando Gutiérrez **Vásquez** impugno el fallo proferido por el Juez de primera instancia.

Conseio Superior de la Judicatura

Habiendo correspondido por reparto a este Juzgado, se admite la impugnación al fallo aludido, mediante auto calendado el día veintinueve (29) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Impugnación

En el expediente digital obra escrito de impugnación, donde el accionante Oscar Fernando Gutiérrez Vásquez, plantean su inconformidad. 010EscritoImpugnación

Fundamentos de la decisión

Problema Jurídico

En este asunto corresponde al Despacho resolver, si lo decidido por el Juez de primera instancia corresponde a un actuar legítimo del fallador, qué en últimas se concretó, en que el a quo no tuvo en cuenta lo solicitado en el escrito de tutela, pues considera que no se valoró en debida forma la indebida notificación en el trámite del proceso policivo adelantado en su contra; considera el accionante que el mismo está viciado y se configura nulidad pues no se tuvo en cuenta el certificado de concepto de uso de suelos favorable, generando de esta manera un perjuicio irremediable.

Tipo de Proceso	Acción de Tutela			
Radicación del	l Proceso	257543103002 202220074		
Soacha, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)				

Competencia

Este despacho es competente para conocer del asunto, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y con los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, lo que indica que toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública e incluso de particulares.

La acción de tutela constituye un mecanismo encaminado a la protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier autoridad pública e incluso en algunos casos por los particulares.

Desde el plano del propio funcionamiento estatal, también es posible identificar un cambio a partir de la Constitución de 1991, porque los fines que se predican de nuestra organización política, los principios que se defienden en la Carta de Derechos y la estructura que se construye tras la idea de la función pública, exige la participación de todos los servidores públicos –sin importar cuál sea el contenido material de sus actos- y una aplicación de las normas vigentes que son tomadas como el inicio de la tarea de protección y garantía de los derechos.

Contenido de la Decisión ama Judicial

De acuerdo con los argumentos planteados por los impugnantes, el análisis que está Juzgadora, debe realizar es sí el fallo del a quo en efecto es acertado. Para tales efectos, se procede al análisis del caso en concreto. Y en aras de dar respuesta al problema jurídico planteado de acuerdo con los diferentes documentales arrimadas al plenario.

Caso Concreto

De las diferentes pruebas recaudadas en el plenario se determina que la inconformidad del tutelante **Oscar Fernando Gutiérrez Vásquez** radica en que, el a quo incurrió en un yerro, al no valorar en debida forma los hechos que originaron la presente acción contitucional, pues dentro del trámite del proceso administrativo – policivo adelantado en su contra está viciado de nulidad por indebida notificación, desde la constitución del acta de reanudación de audiencia pública que data de veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021) y en consecuencia el expedición del acto administrativo resolución n.º 0257 con fecha del veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022), proceso en el cual consideran que se vulneraron las sus garantias constitucionales.

Sea lo primero establecer, que la presente impugnación de tutela, está llamada a fracasar, pues esta Juzgadora, avizora de las documentales adosadas al plenario, entre ellas las actuaciones de las entidades accionadas no se cumple con el principio de inmediatez.

A lo anterior, el principio de inmediatez, se debe tener en cuenta la exigencia de un término razonable entre la vulneración del derecho fundamental del peticionario y la presentación de la tutela, evitando el uso de este mecanismo constitucional como herramienta, es así que, la acción

Tipo de Proceso	Acción de Tutela			
Radicación del	Proceso	257543103002 202220074		
Soacha, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)				

de tutela procede "dentro de un término razonable y proporcionado", contando a partir del momento en el que se produce la violación del derecho. En este sentido, la inmediatez con la que debe ejercerse la acción es un factor determinante para su procedencia, pues su objeto y finalidad tiene relación directa con la necesidad de proteger de manera pronta y efectiva los derechos fundamentales de las personas, cuyo amparo, por su propia naturaleza, no puede aplazarse en el tiempo.

Por otra parte, este despacho Constitucional, considera pertinente y útil, citar lo establecido por la Honorable Corte Constitucional frente a la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular, teniendo en cuenta que estamos ante un proceso administrativo policivo que adelantó las entidades accionadas, así que la sentencia T – 002/2019, se pronuncia de la siguiente manera:

"El artículo 86 de la Constitución consagra la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario, mediante el cual se busca evitar, de manera inmediata, la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Su procedencia está condicionada a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial". Sin embargo, esta Corporación ha señalado que no puede declararse la improcedencia de la tutela por la sola existencia en abstracto de un medio ordinario de defensa judicial. En el marco del caso concreto, el juez constitucional debe analizar si la acción dispuesta por el ordenamiento jurídico es idónea y eficaz para proteger los derechos fundamentales comprometidos. En el evento en que no lo sea, la acción de tutela procederá para provocar un juicio sobre el fondo.

Por regla general, la acción de tutela contra actos administrativos de carácter particular es improcedente por cuanto es posible controvertir su contenido e incluso solicitar su suspensión provisional a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, el amparo procede en estos casos, de manera excepcional, cuando la misma se invoque para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

xepublica de

En ese sentido, esta Corporación ha reiterado que, conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, pues para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, cuando los derechos fundamentales del accionante resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición tardía de decisiones judiciales propios de la referida jurisdicción, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de las garantías constitucionales para evitar un daño irreparable:

"La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo."

No obstante, en los casos en los que se compruebe que existe otro medio de defensa judicial, pero éste no resulta idóneo ni eficaz para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, el juez constitucional debe verificar que el mismo sea: (i) inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) grave, esto es, que el haber jurídico de la persona se encuentre amenazado por un daño o menoscabo material o moral de gran intensidad; (iii) requiera medidas urgentes con el fin de lograr su supresión y conjurar el perjuicio irremediable; y (iv) demande la

Tipo de Proceso	Acción de Tutela			
Radicación del Proceso		257543103002 202220074		
Soacha, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)				

intervención del juez de tutela de forma impostergable para garantizar el restablecimiento integral del orden social justo".

En Sentencia T-1316 de 2001, la Corte concluyó que "no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que, por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños (...)".

En ese orden, cuando se pretenda la suspensión de un acto administrativo de carácter particular por medio de la acción de tutela el juez constitucional tiene la obligación de ponderar en cada caso en particular el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos y verificar que se acredita la gravedad de la situación y la falta de idoneidad y eficacia de los mecanismos ordinarios para la real protección de los derechos fundamentales alegados.

De lo anterior, este estrado judicial, vislumbra que la presente acción constitucional está llamada a confirmarse, teniendo en cuenta el pronunciamiento citada en párrafos anteriores por la Honorable Corte Constitucional, en reiteradas oportunidades a establecido que la acción constitucional de tutela resulta improcedente por regla general frente actos administrativos de contenido particular y concreto, como ocurre con la resolución expedida en el proceso administrativo resolución n.º 0257 con fecha del veintidós (22) de febrero de dos mil veintidós (2022) iniciado por las entidades accionadas en contra del tutelista, el Alto Tribunal Constitucional indica que excepcionalmente procederá cuando la misma se invoque para evitar la configuración de un perjuicio irremediable, pues en el caso en concreto el accionante no logra probar en sede de tutela la ocurrencia del mismo, pues no basta con hacer la manifestación, es necesario la comprobación de dicho perjuicio, pues a voces de la H. Corte Constitucional "En Sentencia T-1316 de 2001, la Corte concluyó que "no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables. Con todo, esta previsión del artículo 86 de la Carta debe ser analizada en forma sistemática, pues no puede olvidarse que existen ciertas personas que, por sus condiciones particulares, físicas, mentales o económicas, requieren especial protección del Estado, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los niños (...)".

Siendo estos los argumentos para que este Despacho constitucional confirme el fallo opugnado.

En mérito de lo expuesto, este juzgado en instancia de juez de tutela en nombre de la República de Colombia y por mandato de la Constitución y la ley.

Resuelve

Primero: Confirmar el fallo proferido el día diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Cuarto (04) de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Soacha – Cundinamarca, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Segundo: Notifiquese de esta decisión a las partes involucradas por el medio más expedito.

Tipo de Proceso Acción de Tutela

Radicación del Proceso 257543103002 202220074

Soacha, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Tercero: Cumplido lo anterior, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifiquese y Cúmplase

Paula Andrea Giraldo Hernández

Juez



Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

Juzgado Segundo Civil del Circuito - Soacha Cundinamarca

Firmado Por:
Paula Andrea Giraldo Hernandez
Juez Circuito
Juzgado De Circuito
Civil 002
Soacha - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 55882400078727b27d0f3037209d24ee97fbbdb2360029657b462794ca0ab938

Documento generado en 19/12/2022 11:25:40 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica